

Juan Carlos Velasco Arroyo ★

Acerca de la democracia deliberativa. Fundamentos teóricos y propuestas prácticas

«El parlamento es la asamblea deliberativa de una nación»

(Edmund Burke, 1774)

«Vivimos en la era de la democracia, o eso parece»

(David Held, 1991)

Sumario: I. LA CUESTIÓN DEMOCRÁTICA HOY.—II. EL MOMENTO DELIBERATIVO DE LA POLÍTICA.—III. DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y REPUBLICANISMO.—IV. LA PRAXIS DEMOCRÁTICA: INSTITUCIONES POLÍTICAS, DINAMISMO ASOCIATIVO, GRUPOS MINORITARIOS Y DESOBEDIENCIA CIVIL.—V. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL ESPACIO PÚBLICO.—VI. LA CALIDAD DEL DEBATE PÚBLICO: ALGUNAS PROPUESTAS PRÁCTICAS.

I. LA CUESTIÓN DEMOCRÁTICA HOY

A diferencia de lo que sucedía en cualquier otro momento de la historia, en nuestra época la democracia no sólo se presenta como el único sistema político legítimo, sino como la forma *normal* de gobierno (cfr. Held, 1991: 15). Nunca como hoy han existido tantos regímenes democráticos en el mundo¹. Sin embargo, y a pesar de esta situación de indiscutible hegemonía, lo que se esconde tras su mera mención no corresponde, en realidad, a

* Científico Titular del Instituto de Filosofía del CSIC (Madrid).

¹ Muestra del inmenso progreso que experimentó la extensión de la democracia a escala planetaria hace apenas dos décadas es, por ejemplo, el cambio de apreciación que se percibe entre la introducción a la primera edición del libro de Norberto Bobbio *El futuro de la democracia* y la de la segunda. En la edición de 1984 se podía leer: «en el mundo, la democracia no goza de óptima salud» (Bobbio, 2000: 15). En cambio, en la de 1991 se decía: «las democracias existentes no sólo han sobrevivido, sino que nuevas democracias aparecieron y reaparecen allí donde jamás habían existido o habían sido eliminadas» (Bobbio, 2000: 8-9).

un único contenido que pueda ser reconocido por todos de igual manera. Nociones como democracia, soberanía popular o autodeterminación se han convertido en meras cáscaras vacías. En particular, el término democracia es un sustantivo que admite una multitud de adjetivos (directa, representativa, participativa, formal, fuerte, liberal, burguesa, popular, populista, pluralista, elitista, orgánica, corporativa, nacional, etc.), que, lejos de ser accidentales, acaban determinando su sentido en el uso cotidiano del lenguaje. Frente a esta inflación del término, la solución no pasa ciertamente por renunciar a la democracia, sino por dar un auténtico sentido a la apelación al pueblo para justificar las acciones de gobierno. De ahí, que como afirman Rödel, Frankenberg y Dubiel (1997: 33), «el problema de la época actual no es la falta de reconocimiento retórico de fórmulas de legitimación democrática, sino la confusión de sus postulados».

Para no perderse en inoportunas disquisiciones históricas que nos llevarían demasiado lejos del propósito de este artículo², cabe convenir que la teoría democrática hegemónica tras la II Guerra Mundial presupone la existencia de una contradicción irresoluble entre participación democrática y gobernabilidad. El origen teórico de esta grave discrepancia apuntada puede rastrearse en los debates del período de entreguerras y en el profundo cuestionamiento de los presupuestos participativos efectuado por autores como Max Weber, Carl Schmitt o Joseph Schumpeter, entre otros muchos. Tales controversias y reflexiones desembocaron en la formulación de una teoría restringida de la democracia conocida como *elitismo democrático*, de acuerdo con la cual para que el sistema político pueda ponerse en marcha la soberanía de las masas ha de limitarse en la práctica a un mero procedimiento de selección de los gobernantes. Esta concepción ha sido elevada a la categoría de paradigma por aquella tribu de analistas que bien podrían denominarse *empiristas* (entre los que destaca Anthony Downs, 1973, y epígonos de la relevancia de Giovanni Sartori 1988), mientras que por parte de los filósofos políticos de sesgo *normativista* (que tratan de atender a la dimensión más estrictamente deóntica y conceptual del pensamiento democrático) ha sido criticada e impugnada con especial severidad y relativo éxito. Como es sabido, estos últimos han tomado nuevos bríos en las últimas décadas, pues con la ola de teoría política normativa inaugurada a raíz de la publicación en 1971 de *A Theory of Justice* de John Rawls se ha recuperado la dimensión moral en la consideración de los sistemas democráticos.

² Aunque el verdadero problema estribe en cómo concretar hoy en instituciones y reglas unas intuiciones demasiado genéricas que fueron pensadas para otros tiempos y lugares, tener en mente las raíces griegas de nuestra noción de democracia siempre puede resultar ilustrativo. Al respecto, uno de los *topos* clásicos más célebres lo hallamos en Tucídides, que, por boca de Pericles, se manifiesta en los siguientes términos en su panegírico del sistema ateniense: «Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos no antepone las razones de clase al mérito personal» (*Historia de la guerra del Peloponeso*, libro II: 37).

Es en este contexto a la vez teórico y práctico —que apenas ha sido esbozado— donde se han de ubicar las reflexiones acerca del significado e implicaciones prácticas de la democracia deliberativa. Las décadas de los años ochenta y noventa sirvieron de escenario temporal a una serie de debates sumamente fructíferos para el desarrollo de la teoría política contemporánea. La recuperación que por entonces se llevaba a cabo de la noción de sociedad civil y las indagaciones —en cierta medida confluyentes— sobre el concepto de esfera pública facilitaron la formulación de una concepción deliberativa de la política, que posiblemente constituya una de las aportaciones más notables efectuadas en la teoría democrática a lo largo de la segunda mitad del siglo xx. Con todo, este impulso académico hubiera devenido en inane si el completo colapso del bloque soviético a finales de la década de los ochenta —con la caída del muro de Berlín como suceso emblemático— no se hubiera conformado como el caldo de cultivo adecuado para la eclosión de tales reflexiones, por mucho que los presupuestos teóricos e históricos ya estuvieran colocados de antemano (cfr. Cohen y Arato, 2000).

La impresionante oleada democratizadora que barrió el Sur de Europa durante los años setenta —en donde se inscribe la transición política española—, se extendió por buena parte de Latinoamérica durante los años ochenta y alcanzó con el cambio de década al Centro y al Este de Europa oriental no logró sofocar la insatisfacción que desde hacía tiempo despertaba la práctica real de las democracias parlamentarias o representativas entre muchos observadores. Creció la apatía entre los ciudadanos ante una forma de organización política en la que percibían que su opinión apenas contaba. Si bien el desengaño no llega a ser absoluto, la merma del crédito del que aún gozan las democracias resulta innegable. Fenómenos como la corrupción o la partitocracia no hacen sino abonar este escepticismo. Se trata de una insatisfacción que a veces aboca directamente a la desafección, pero que siempre conduce a la merma del prestigio asociado al término democracia. El recelo, la sospecha o el desengaño se encuentra detrás de gran parte de los esfuerzos teóricos realizados por repensar en serio la democracia que antes han sido apuntados. En particular, la noción de democracia deliberativa —como sucede también con la actual reivindicación del republicanismo, con el que, como se verá, mantiene una estrecha relación— representa una forma de crítica a las democracias liberales modernas, pero efectuada desde la perspectiva de una recuperación normativa del concepto de ciudadanía activa. De hecho, no resulta nada ajeno a los promotores intelectuales de la democracia deliberativa la voluntad de elaborar una concepción de la política capaz de dar cobertura teórica a los nuevos movimientos sociales (con frecuencia «de protesta», aunque no necesariamente), a las iniciativas cívicas y, en general, a todas aquellas conductas políticas *no* convencionales que procuran o favorecen la desinstitucionalización y la desestatización de la política.

Entre los numerosos autores que se han ocupado de desarrollar y articular la noción de *democracia deliberativa*, resaltan los nombres de Joshua Cohen,

Seyla Benhabib, Carlos S. Nino, Amy Gutman y Cass S. Sunstein³. Con todo, la obra de Jürgen Habermas representa para muchos la referencia ineludible a la hora de abordar este tema. Dado, además, que entre todos los citados la influencia de este pensador germano es sin duda la más descollante en nuestro ámbito cultural y que sus escritos sean posiblemente los más accesibles en lengua castellana, a lo largo de este artículo se prestará especial atención a sus planteamientos, sin que esto sea óbice para considerar otras fuentes.

Aunque habrá quien discrepe, podemos coincidir con Norberto Bobbio (2000: 18) en lo que él llama la «definición mínima de democracia», a saber: «se entiende por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados». En este sentido, y teniendo en cuenta el variado abanico de concepciones de la democracia disponibles en el actual mercado de ideas, la noción de democracia deliberativa, que pone el énfasis en el refinamiento y la extensión del ideal participativo, habría que catalogarla como una versión *fuerte* o *radical* de la misma. Pero a diferencia de las versiones más populistas de la democracia directa, se trata de un planteamiento que procura garantizar la deliberación y la reflexión, así como la responsabilidad. En la exposición de sus presupuestos se encuentra implícita la denuncia de la reducción de la noble tarea de la política a la mera labor de suscitar o generar un apoyo no específico de las masas. Va, pues, mucho más allá de una mera formulación legalista de carácter formal de la vida política, eso mismo que en un lenguaje algo trasnochado se despreciaba como *democracia burguesa*. Implica, más bien, una recuperación de la concepción clásica asociada a las ideas de autodeterminación, igualdad política y participación en los procesos públicos de toma de resoluciones. Supone, asimismo, la promoción de una forma de vida caracterizada por la preeminencia del espacio público.

II. EL MOMENTO DELIBERATIVO DE LA POLÍTICA

Para valorar con mayor detalle la aportación de la política deliberativa en el ámbito de la teoría democrática conviene considerar el *marco conceptual* donde se inscribe. Siguiendo a Jon Elster (2001: 18-21), puede distinguirse en el seno de las democracias parlamentarias contemporáneas tres métodos o procedimientos para coordinar la acción colectiva y obtener resoluciones políticas; tres procedimientos que conviven en la práctica, aunque con diverso peso relativo:

³ La nómina de autores que han trabajado en la última década sobre la noción de *democracia deliberativa* no se reduce a los arriba citado. Sin ánimo alguno de exhaustividad, entre las monografías cabe destacar las siguientes: Fishkin (1991), Gutmann y Thompson (1996), Nino (1997), Bohman (1997). Y, entre los libros colectivos sobre la materia, cfr. Benhabib (1996), Elster (2001), Bohman y Rehg (1997) y Macedo (1999).

- *deliberación*: debates en foros públicos donde se comparan argumentos racionales;
- *negociación*: transacciones de mercado donde se ofertan promesas y amenazas; y
- *votación*: agregaciones lineales de opciones privadas adoptadas en silencio, esto es, sin comunicación entre los participantes.

En realidad, como sostiene Elster (2001: 28), «la deliberación nunca es empleada como único procedimiento para tomar decisiones colectivas. Siempre es complementada por la votación o la negociación o por ambas». No es extraño además que el uso que se hace de ella se reduzca en la práctica a una mera representación escénica. Teniendo en cuenta esto, el núcleo común de las diversas concepciones de democracia deliberativa podría perfilarse con la ayuda de dos notas: «Todas concuerdan, creo, en que el concepto incluye la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los que han de ser afectados por la decisión o de sus representantes: ésta es la parte democrática. Todas, asimismo, concuerdan en que incluye la toma de decisiones por medio de argumentos ofrecidos *por* y *para* los participantes que están comprometidos con los valores de racionalidad e imparcialidad: ésta es la parte deliberativa» (Elster, 2001: 21). Un sistema político puede caracterizarse como deliberativo en la medida en que la toma de decisiones colectivas se realiza a través de la discusión entre ciudadanos libres e iguales bajo estas dos condiciones. Todas las personas afectadas directa o indirectamente por las decisiones políticas han de tener la oportunidad de poder participar no sólo en la adopción de dichas decisiones, sino también en los procesos previos de definición y formación de las mismas. No se trata, pues, de una democracia compuesta simplemente por agentes racionales que deciden (ni tampoco de una serie de mecanismos más o menos sofisticados para la toma de decisiones colectivas), como defiende la teoría elitista de la democracia, sino de una democracia de deliberantes, de agentes racionales que se informan, reflexionan en común y sólo entonces deciden.

Para quienes preconizan la democracia deliberativa, la votación constituye tan sólo la última fase en un proceso racional de toma de decisiones. Si la votación no viene precedida por deliberaciones (o, en su defecto, de negociaciones entre las partes) no cabe hablar apenas de un proceso racional. Con la noción de democracia deliberativa se subraya que la necesidad de que haya un alto grado de reflexión y debate, tanto por parte de la ciudadanía, como del legislativo y del ejecutivo. Lo que se trata es de garantizar que las decisiones sean reflexivas y bien fundadas, y no simplemente instantáneas de las opiniones individuales vertidas en un momento dado. Se pone el acento en todos aquellos procesos que favorecen el intercambio de opiniones, la reflexión y la responsabilidad de los ciudadanos. Se contraponen a una concepción del espacio público donde los ciudadanos se encuentran entre sí tan sólo para alcanzar compromisos sobre posiciones e intereses prácticamente cerrados. Frente a esta posición individualista se aboga por la necesidad de instaurar un espacio de interacción y de experiencias compartidas

que permita generar la cohesión social necesaria como para poder deliberar sobre intereses comunes y acordar soluciones generales. La deliberación pública se concibe entonces como el mecanismo adecuado que «garantiza la posibilidad de generar y poner en común la información necesaria para que los ciudadanos perciban sus intereses» (Sampedro, 2000: 16).

Democracia deliberativa no es sinónimo de democracia directa, de respuestas inmediatas a los problemas planteados, ni de respuestas irreflexivas ante las presiones populares. Los diferentes métodos de participación directa no resultan incompatibles, sin embargo, con la idea de democracia deliberativa (cfr. Nino, 1997: 204-205): así, por ejemplo, la iniciativa popular (contemplada, por cierto, en el art. 87.3 de la Constitución Española) o la celebración de referéndums (art. 92 de la CE) son medidas recomendables y en sintonía con el ideal de que todos los afectados por las decisiones participen de manera directa y reflexiva. En los sistemas democráticos modernos también encontramos rastros que apuntan hacia el ejercicio de la deliberación: así, como señala Sunstein (2003: 46), el sistema bicameral fue diseñado originalmente con el objeto de frenar la acción suficientemente deliberativa de una sola cámara legislativa.

III. DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y REPUBLICANISMO

Desde los tiempos de Cicerón y Tito Livio hasta el momento presente, con autores como Quentin Skinner, Maurizio Viroli o Philip Pettit, el republicanismo se ha articulado como un discurso político contrario a toda forma de tiranía y defensor del autogobierno de los ciudadanos. El republicanismo se reconoce en el rechazo de la dominación y en la reivindicación de una idea robusta y positiva de libertad. Para el sostenimiento de dicha libertad, tales autores consideran imprescindible el concurso de la virtud cívica, que a su vez requiere de ciertas precondiciones políticas: en particular, que las instituciones básicas de la sociedad queden bajo el pleno control de los ciudadanos. Consecuentemente, la tradición republicana concede un valor intrínseco a la vida pública y a la participación política: el ciudadano ha de implicarse *activamente* en algún nivel en el debate político y en la toma de decisiones, ya que ocuparse de la política es ocuparse de la *res publica*, esto es, de lo que atañe a todos.

Participación, deliberación y amor patrio se implican mutuamente, pues, como sostenía Tocqueville (vol. I, 1989: 233), el mejor modo de «interesar a los hombres en la suerte de su patria, es el de hacerles participar en su gobierno». Hay además una intuición básica sobre la naturaleza de la política que comparten los autores de la tradición republicana y las diferentes versiones de la democracia deliberativa, a saber: «las preferencias individuales prerreflexivas deben ser examinadas en un espacio público a la luz de razones» (Ferrara, 2004: 6). Por todo ello cabe afirmar, como sostiene este mismo autor, que «el republicanismo tiene una clara afinidad electiva con las concepciones deliberativas de la democracia» (Ferrara, 2004: 11). Algo similar

cabe sostener con respecto a Habermas, cuyo pensamiento político admite diversas calificaciones, aunque quizás sean las de «demócrata radical» y la de «republicano» las más ajustadas. El núcleo de sus propuestas prácticas —que se resumen en su concepción de la *política deliberativa*— van dirigidas a facilitar una mayor participación de los ciudadanos en los diversos procesos de toma de decisión, una intensificación del espacio público y, sobre todo, una renovación del constitucionalismo liberal en una clave más democrática (cfr. Habermas, 1998, cap. VII). En definitiva, y en la misma línea que la apuntada por otros autores que han contribuido al actual resurgimiento del pensamiento republicano, Habermas pone todo su empeño en combatir la creciente apatía política de las sociedades avanzadas y recuperar así el pulso de las democracias.

La acción «política» presupone la posibilidad de decidir a través de la palabra sobre el bien común. Esta acepción del término, sólo válida en cuanto ideal aceptado, guarda un estrecho parentesco con la concepción de la política defendida por Habermas y, en particular, con el modelo normativo de democracia que ha desarrollado y que incluye un procedimiento ideal de deliberación y toma de decisiones. Un modelo que responde a un propósito no disimulado de extender el uso público de la palabra y, con ello, de la razón práctica a las cuestiones que afectan a la buena ordenación de la sociedad. Sin el poder de la palabra, en la que ciertamente se basa la capacidad humana para «actuar concertadamente» (Arendt, 1973: 146), no habría acción política y, menos aún, democracia. De ahí la convicción de que antes de pasar a la acción es preciso examinar las cosas a fondo⁴. Con la democracia deliberativa Habermas busca la manera en que el *poder comunicativo*, esto es, el poder generado por la participación, el diálogo y la deliberación pública⁵, pueda operacionalizarse como mecanismo de solución de problemas y de toma de decisiones; o, dicho de otra manera, busca cómo transformar el poder social de la comunicación en poder administrativo efectivo.

La concepción habermasiana de la democracia logra aunar la fundamentación de un discurso normativo derivado de las estructuras racionales de

⁴ Estas intuiciones básicas que inspiran a la democracia deliberativa han acompañado a la democracia desde su nacimiento en la Atenas del siglo V (cfr. Mouffe, 2003: 95). Así, en la famosa *Oración fúnebre de Pericles*, se sostiene: «Somos, en efecto, los únicos que a quien no toma parte en los asuntos públicos lo consideramos no un despreocupado, sino un inútil; y nosotros en persona cuando menos damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntualmente, porque, en nuestra opinión, no son las palabras lo que suponen un perjuicio de la acción, sino el no informarse por medio de la palabra antes de proceder a lo necesario mediante la acción» (Tucídides, *Historia de la Guerra del Peloponeso*, libro II: 40). Esto abonaría la tesis sostenida por Jon Elster (2001: 13) de que con la noción de democracia deliberativa no se está procediendo a una innovación de la democracia, sino a una renovación de la misma.

⁵ Entre los inspiradores teóricos de la democracia deliberativa un nombre imprescindible es el de Hannah Arendt. La filosofía política de Arendt debe entenderse como una reivindicación de la participación ciudadana en la vida pública, como un alegato en favor de la virtud ciudadana frente al desguace de la política democrática por parte del totalitarismo. Los teóricos de la democracia deliberativa le rinden cumplido tributo intelectual sobre todo por haber propuesto las líneas esenciales de lo que ha de entenderse por una genuina república democrática. En particular, la comprensión comunicativa del poder acuñada por Arendt (1973) le sirve a Habermas (1998, cap. IV.2) como fundamento de su concepto normativo de democracia.

la comunicación con una reconstrucción histórica y sistemática de las formas institucionales sobre las que se ha plasmado históricamente el proyecto democrático. En este sentido, Habermas se muestra especialmente sensible a asumir las críticas provenientes de la tradición hegeliana acerca de las carencias institucionales del formalismo moral kantiano que él mismo adopta parcialmente en su ética discursiva. Le afecta, en particular, la acusación de que el planteamiento de una teoría de la sociedad esencialmente normativa no se adecue a los dictados de la realidad política y, por ello, como él mismo reconoce, le preocupa «desmentir la objeción de que la teoría de la acción comunicativa es ciega frente a la realidad de las instituciones» (Habermas, 1998: 58). Admite sin reserva que, dada la brecha que se abre entre lo ideal y lo posible, no es factible una transición coherente desde la esfera de los principios generales al ámbito del actuar político sin establecer *mediaciones* que garanticen una fluida comunicación. Por suerte, cree encontrar en las instituciones constitucionales vigentes (la división de poderes dentro del aparato estatal, la vinculación de la actividad estatal al derecho y, en particular, los procedimientos electorales y legislativos) un reflejo, al menos parcial, de las exigencias normativas de su modelo político. Los valores y contenidos ideales presentes en el mundo de la vida, en el lenguaje público cotidiano, en las instituciones y en los textos jurídicos (como, por ejemplo, las declaraciones de derechos) no constituyen vanas pretensiones ni meras ficciones acomodaticias, sino que inciden sobre la acción humana, exigiendo constantemente una práctica adecuada que aligere la tensión entre hechos y valores. Dichas realizaciones y anclajes institucionales constituirían entonces las mediaciones necesarias para poder transitar del nivel de su propia teoría a la realidad social sin caer en planteamientos de índole voluntarista: «El desarrollo y la consolidación de una política deliberativa, la teoría del discurso los hace depender, no de una ciudadanía colectivamente capaz de acción, sino de la institucionalización de los correspondientes procedimientos y presupuestos comunicativos, así como de la interacción de deliberaciones institucionalizadas con opiniones públicas desarrolladas informalmente» (Habermas, 1998: 374). El Estado democrático se configura entonces como la institucionalización jurídica de una densa red de discursos y negociaciones, así como de las condiciones de comunicación y de los procedimientos que hacen posible la formación discursiva de la opinión común (cfr. Habermas, 1998: 230-236).

La democracia sería, de acuerdo con los presupuestos habermasianos, aquel modelo político en el que la legitimidad de las normas jurídicas y de las decisiones públicas radicaría en haber sido adoptadas con la participación de todos los potencialmente afectados por ellas. Pero la intuición más genuina de la concepción deliberativa de la democracia consiste en la afirmación de que, llegado el momento de adoptar una decisión política, el seguimiento de la regla de la mayoría ha de subordinarse al previo cumplimiento del requisito de una discusión colectiva capaz de ofrecer a todos los afectados la oportunidad de defender públicamente sus puntos de vista y sus intereses mediante argumentos genuinos y negociaciones limpias. La

deliberación en ningún caso debe confundirse con la mera ratificación colectiva de posiciones ya cristalizadas. Si todas las preferencias y opiniones políticas han de someterse a un proceso de debate e ilustración mutua, esto implica que todos los actores políticos deben estar abiertos a cambiar su posición inicial si como resultado de la deliberación pública encontraran razones para hacerlo. Si esta actitud no está presente, la discusión queda como un mero trámite que hay que cumplir antes de proceder a votar, esto es, de aplicar mecánicamente el poder de la mayoría. En la práctica política cotidiana resulta ciertamente difícil someterse a los exigentes requisitos de la democracia deliberativa, pero es ahí donde se ponen a prueba la madurez y el fuste de una democracia. No hay modo de medir estas cualidades si no es en función del *nivel discursivo del debate público* (Habermas, 1998: 381). De ahí que lo decisivo sea la *mejora de los métodos y condiciones del debate, de la discusión y de la persuasión*.

A la hora de concretar las estilizadas y rigurosas exigencias de su propuesta, Habermas acaba adoptando un apreciable grado de realismo. Mas esto no debería dar pie a afirmar precipitadamente que esté de más la presentación abstracta y universalista de su enfoque teórico inicial, a veces casi rayano con lo utópico. La definición de un proyecto o modelo ideal puede representar el primer paso en la generación de la energía colectiva necesaria para la puesta en marcha de un proceso normativo de organización de la acción social. En cualquier caso, la extensión de la democracia implica, desde la perspectiva de la política deliberativa, la negación de los mecanismos de exclusión y la atención en la participación real. Por tanto, en las democracias reales el potencial crítico de la política deliberativa está desgraciadamente bien lejos de haberse agotado.

Habermas no aboga en favor de cualquiera de las democracias hoy en día al uso, sino de una democracia cualificada, de una democracia deliberativa que presenta a la opinión pública política activa —con sus prácticas argumentativas— como la estancia donde se dilucida la legitimidad del sistema político, así como la de sus diversos procesos de toma de decisión. Habermas no mantiene, por tanto, un tono descriptivo ni resignado en su reflexión acerca de la democracia. Su acento en la potenciación del *nivel discursivo del debate público* implica de hecho un radical cuestionamiento del funcionamiento real de la democracia de masas, reducida en la práctica a un sistema de selección de líderes, y que según autores como Weber o Schumpeter supuestamente sería el modelo que mejor encajaría con la sociedad contemporánea. Ciertos politólogos, tras constatar que *de facto* el reparto de la capacidad de juicio político de los ciudadanos no es igualitario, consideran que una cierta apatía política, un cierto desinterés, resulta incluso conveniente en términos funcionales. Desde la perspectiva de un *ethos* republicano, como el que asume Habermas, esa posición no puede resultar más desoladora. Frente a esta concepción elitista de la democracia, la política deliberativa representa un modelo de descentramiento del poder político. La estrategia seguida por Habermas no consiste, sin embargo, en fundamentar la democracia desde la mera razón, sino en redescubrir sus prácticas y sus

metas tal como se expresan teóricamente en los textos fundacionales de las comunidades políticas democráticas. De ahí que su tarea se limite a resaltar los presupuestos de la deliberación democrática, esto es, las condiciones necesarias para que la discusión crítica y abierta de asuntos de interés general se lleve a cabo en los distintos foros y canales de la esfera pública. No se trata de supuestos inventados en un laboratorio de ingeniería social, sino de elementos fundamentales del modo en que las sociedades democráticas existentes se comprenden normativamente a sí mismas. La democracia deliberativa considera que la mejor forma de alcanzar la meta propuesta en los textos legales de las democracias constitucionales es tomarse en serio los derechos de participación existentes y «hacer como si» fuera posible ejercerlos. Por ello, no se preconiza una reforma radical de las instituciones, sino «intervenir en ellas «como si» realizasen las funciones que dicen cumplir y crear algunas nuevas» (Sampedro, 2000: 27).

Si se compara con la concepción republicana del Estado concebido como una comunidad ética y con la concepción liberal del Estado concebido como guardián de la sociedad centrada en el subsistema económico, la fórmula habermasiana puede ser considerada como un tercer modelo democrático. Sin renunciar a los presupuestos del enfoque normativo de la filosofía práctica, Habermas concibe la reconstrucción del proyecto político democrático en y desde el horizonte irrebasable de la única democracia realmente existente: la democracia liberal. De hecho, su ambición nada oculta sería armonizar el elemento democrático y el liberal de la modernidad política (cfr. Habermas, 1998: 374). Dicha fórmula se apoya en las condiciones comunicativas bajo las cuales el proceso político tiene para sí la presunción de producir resultados racionales porque es llevado a cabo en toda su extensión de una manera deliberativa. Aunque supone la compatibilidad, de hecho la interrelación íntima, entre los derechos y la democracia, el buscado equilibrio entre las concepciones privada y pública de la autonomía resulta bastante inestable y el modelo acaba escorándose hacia la pública al poner el acento en la autolegislación del ciudadano, que «exige que aquellos que están sometidos al derecho como destinatarios suyos, puedan a su vez entenderse como autores del derecho» (Habermas, 1998: 186).

Si se considera que la soberanía popular se manifiesta de manera directa e inmediata, la articulación de las maquinarias institucionales se convierte en una cuestión de importancia menor. Sin embargo, lo decisivo a efectos prácticos es saber cómo se expresa ordinariamente la voluntad de los ciudadanos, qué procedimientos se siguen para obtenerla. Por ello, Habermas quiere avanzar en la elaboración de un procedimiento cognitivo que permita transformar la *cruda* voluntad popular en una versión algo más *depurada*. De dicho modelo se deriva un horizonte político de carácter reformista que responde a la necesidad de ensanchar el marco formal de la democracia representativa: se trataría tanto de profundizar en los elementos de participación ciudadana ya existentes mediante el fomento de una cultura política activa, como de asegurar los contenidos materiales de carácter distributivo

establecidos por el Estado de bienestar con el fin de neutralizar las indeseadas consecuencias no igualitarias de la economía de mercado.

La política deliberativa consiste, en suma, en una modalidad de democracia participativa que vincula la resolución racional de conflictos políticos a prácticas argumentativas o discursivas en diferentes espacios públicos. Para su puesta en marcha resulta vital la presencia de una esfera pública asentada sobre la sociedad civil. La esfera pública estaría configurada por aquellos espacios de espontaneidad social libres de interferencias estatales, así como de las regulaciones del mercado y de los poderosos medios de comunicación. En dichos espacios surgirían la opinión pública en su fase informal, las organizaciones cívicas y, en general, todo aquello que desde fuera influye, evalúa y critica la actividad política. En última instancia, la efectividad de este modelo de democracia que Habermas postula se hace recaer sobre procesos informales que presuponen la existencia de una vigorosa cultura cívica. Ahí se encontraría también, sin duda, la mayor debilidad de la propuesta.

La vigencia de la política deliberativa depende de la robustez que posea la sociedad civil, así como de su capacidad para llevar a cabo la problematización y el procesamiento público de todos los asuntos que afectan a la sociedad y a sus ciudadanos. La energía procedente de los procesos comunicativos requiere de conducciones que eviten pérdidas y favorezcan una eficaz transmisión a todos los sectores sociales. Para ello se necesita que los ciudadanos se responsabilicen de su propio destino en común y que reflexionen acerca de la sociedad y de sus condiciones, al margen de coacciones que puedan ser impuestas por parte de un poder superior.

IV. LA PRAXIS DEMOCRÁTICA: INSTITUCIONES POLÍTICAS, DINAMISMO ASOCIATIVO, GRUPOS MINORITARIOS Y DESOBEDIENCIA CIVIL

La democracia puede caracterizarse como un sistema político que convierte la expresión de la voluntad popular en normas vinculantes para todos los sujetos políticos y para todos los poderes estatales. Por eso, una adecuada descripción del complejo proceso de elaboración de las normas jurídicas en un Estado democrático no puede alcanzarse con la mera consideración de los aspectos institucionales. Dicho proceso depende en gran medida de la variedad y riqueza de otros elementos no institucionalizados de la vida ciudadana, que sirven de cauce para el ejercicio de los derechos de participación. El principio de la soberanía popular —sobre el que se asienta el sistema democrático— se expresa tanto dentro como fuera de los órganos institucionales de representación (cfr. Maus, 1991).

Si bien el principio de la soberanía democrática, en la medida en que concibe a la ciudadanía como poder legislativo e incluso como poder constituyente, mantiene una estrecha relación con el momento de creación de las normas jurídicas, su mera invocación abstracta no explica suficientemente la génesis y la transformación del derecho, complejos fenómenos que tam-

poco quedan completamente aclarados desde la perspectiva del proceso legislativo en su dimensión institucional, esto es, la creación estatal de normas jurídicas. La democracia vive de presupuestos que ni las instituciones ni las normas jurídicas crean, sino que sólo canalizan. *La democracia no se agota en el mero parlamentarismo*. El parlamento, que encarna el poder legislativo ordinario en cuanto órgano que representa la voluntad popular en los sistemas constitucionales, es, desde el punto de vista de la autocomprensión normativa de los Estados democráticos de Derecho, la caja de resonancia más reputada de la esfera pública de la sociedad, donde en realidad se generan las propuestas que luego se debaten en las cámaras legislativas. Si esto es así —al menos, normativamente lo es—, la génesis de la formación de la opinión se encuentra en los procesos no institucionalizados, en las tramas asociativas multiformes (sindicatos, iglesias, foros de discusión, asociaciones de vecinos, organizaciones voluntarias no gubernamentales, etc.) que conforman la *sociedad civil* como una auténtica red de redes (cfr. Taylor, 1997). En ese ámbito de organizaciones de participación abierta y voluntaria, generadas y sostenidas (al menos parcialmente) de forma autónoma respecto al Estado, se encuentra precisamente la fuente de dinamismo del cuerpo social, la infraestructura de la sociedad para la formación de la opinión pública y la formulación de necesidades. La sociedad civil constituye además la primera instancia para la elaboración de propuestas políticas concretas y, algo sumamente importante, para el control del cumplimiento práctico de los principios constitucionales. Del grado de actividad sostenida por las asociaciones voluntarias de ciudadanos (o, como diría Tocqueville, de los «cuerpos intermedios») depende en gran medida la salud de la vida democrática de una sociedad.

Sin embargo, en la práctica de las democracias modernas (el caso español es, en este sentido, un caso extremo), a la ausencia de una sociedad civil políticamente activa se le suma la debilidad de los instrumentos de control parlamentario, lo que, además de reforzar la preeminencia del ejecutivo, aleja aún más al parlamento —la asamblea deliberativa por antonomasia, como diría Burke— de la centralidad del sistema político y relegándolo a una posición subordinada o secundaria en el panorama de las instituciones políticas. Por si esto ya fuera poco, los partidos políticos —con sus estructuras burocratizadas y férreamente controladas por sus cúpulas dirigentes— han monopolizado estas funciones, negando a la ciudadanía la oportunidad de definir la oferta electoral y el control del cumplimiento de los programas. De esta negativa experiencia surge la convicción de que es preciso otras formas de participación ciudadana que no pasen necesariamente por el tamiz de los partidos. Los ya no tan nuevos movimientos sociales (ecologismo, pacifismo, feminismo, etc.), y el actual renacer, al menos teórico, de la idea de sociedad civil son muestras reales de esa creciente inquietud y de la toma de conciencia de que la vida democrática no se agota en las instituciones políticas convencionales.

El carácter normalizado e institucional de las relaciones políticas con que funcionan realmente las democracias liberales conlleva a menudo a una

burocratización de las mismas, un fenómeno que, como ya se ha señalado, alcanza a la estructura misma de los partidos políticos, sujetos privilegiados de la representación política de los ciudadanos. De ahí que sean precisamente los grupos y movimientos sociales relativamente marginales, en el sentido de escasamente institucionalizados, los que mejor pueden ejercer la función de una opinión crítica que actúe como vigilante del desarrollo efectivo de los principios democráticos. Grupos más o menos reducidos de ciudadanos pueden desempeñar un papel central en la articulación de la voluntad común, que influyen e inspiran los cambios de mentalidad que experimentan las sociedades. El ritmo de ciertos cambios sociales lo marcan a menudo pequeños movimientos o agrupaciones —minorías críticas— constituidos con voluntad de influir en el conjunto social: «las innovaciones sociales son impulsadas con frecuencia por minorías marginales, aunque más adelante se generalicen a toda la sociedad en un nivel institucional» (Habermas, 1991: 185). Sólo algunas minorías que muestran posturas disconformes se enfrentan a las generalizaciones acríticas dominantes en un momento dado. La protesta de una conciencia disidente, organizada en movimiento social, es un importante factor de movilización que puede culminar en la elaboración o en la reforma de una norma jurídica. Es, precisamente, desde esta perspectiva desde donde se puede comprender el fenómeno de la desobediencia civil en las sociedades avanzadas como una piedra de toque de la legitimidad del derecho democrático (cfr. Cohen y Arato, 2000, cap. XI).

Sin duda, una de las capacidades más deseadas por cualquier actor político es la de poder definir los temas que se debaten en la esfera pública. Esta capacidad se la reservan con avaricia quienes poseen el poder político y económico. Quienes no tienen ni una cosa ni la otra tienen que buscar soluciones alternativas. En este contexto, la desobediencia civil aparece como un instrumento óptimo para lograr que un determinado asunto o problema se introduzca como tema de debate dentro de la agenda política.

La reconstrucción de un espacio público orientado a la consideración racional de las cuestiones que conciernen al buen ordenamiento de la sociedad es, como se ha señalado anteriormente, el gran objetivo trazado por la política deliberativa. En este sentido, no puede pasarse por alto que, aunque en las democracias pluralistas el reconocimiento de la igualdad formal incluye el derecho de todos a la palabra, esa facultad a menudo no puede ejercerse de manera inmediata y está sujeta a enormes cortapisas. En este contexto social, en el que el sector social dominante no puede ser movido a escuchar una argumentación a menos que se le fuerce a prestar atención, es donde adquiere sentido abordar la cuestión de la desobediencia civil como una herramienta legítima en el proceso de la formación democrático-radical de la voluntad política (cfr. Habermas, 1988: 51-89). Esta forma pacífica de disidencia representa un elemento normal y necesario de la cultura democrática: un instrumento idóneo para la realización de los fines del Estado democrático de Derecho y para el aseguramiento de la eficacia de los principios y normas constitucionales, un medio útil para lograr la maduración

de la opinión pública y, en definitiva, para la participación política real de los ciudadanos.

En una sociedad en donde la opinión se encuentra dirigida (y, con reiterada asiduidad, también manipulada) por los *mass media*, la protesta de una conciencia disidente, organizada en movimiento social, es un importante factor de movilización que puede culminar en la elaboración o en la reforma de una norma jurídica, así como en el cambio de línea de una cierta política gubernativa. En este sentido, para los diversos individuos o grupos que en un determinado momento se encuentran en minoría, el ejercicio de la desobediencia civil representa una forma de expresar pacíficamente sus desacuerdos con la opinión de la mayoría. En algunos regímenes políticos, v. gr., en los de corte totalitario, los disidentes no suelen disfrutar de muchas oportunidades para manifestarse, por lo que ahí puede resultar más oportuno actuar de un modo más radical, no necesariamente respetuoso con las autoridades y sus disposiciones más o menos arbitrarias. Sin embargo, son las sociedades democráticas las que aparecen como el escenario más habitual de este modo de disidencia: por mor de las mencionadas razones tácticas, la mayor virtualidad práctica de la desobediencia civil está precisamente allí donde el poder posee la forma de legitimación consagrada en la modernidad, la forma democrática de gobierno.

V. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL ESPACIO PÚBLICO

Si descendemos desde el nivel de los ideales al de las realizaciones prácticas, nos topamos con el hecho de que en numerosas democracias contemporáneas —y el caso español resultaría paradigmático— apenas existen espacios donde reflexionar y debatir públicamente sobre las propuestas de los diferentes agentes sociales y menos aún donde intercambiar razones sobre la viabilidad y financiación de las mismas o sobre su concordancia con determinados principios o valores. En las televisiones, ya sean públicas o privadas, en el parlamento nacional o en las cámaras autonómicas no se expresan más que eslóganes, pero casi nunca argumentos. A los ciudadanos se le sustrae la posibilidad de contemplar auténticos intercambios de razones y contrastes directos de ideas entre los adversarios políticos.

Es cierto que las carencias antes apuntadas vienen de lejos: la posibilidad de participación activa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos entendida como presupuesto de la democracia no sólo fue socavada desde el plano teórico, sino también por determinados cambios históricos. El «cambio estructural» del espacio público, su deformación, se produce con la aparición de los nuevos medios de comunicación de masas. El espacio público deja de estar ocupado por ciudadanos razonantes, por lo que cesa también de ser un lugar de discusión y debate (que cumplía además la función de transmitir las inquietudes y necesidades privadas a los poderes públicos); se somete, por el contrario, a una cultura integradora y de mero consumo

de noticias y entretenimiento. Se reestructura así con fines meramente demostrativos y manipulativos (cfr. Habermas, 1982). Este cambio estructural llega a su paroxismo con la aparición del *homo videns*, esto es, el individuo alfabetizado mediante la imagen y con una capacidad limitada para el razonamiento abstracto, lagunas que conllevará un lento ocaso de la reflexión política seria y la despedida de una ciudadanía competente (cfr. Sartori, 1998). Sea o no correcto este análisis y sea cual fuere la valoración que merezca, lo cierto, en cualquier caso, es que, en la sociedad de la comunicación en la que desde hace décadas se desarrollan nuestras vidas, la forma en que se lleve a cabo las deliberaciones sobre los asuntos públicos debe estar adaptada a los medios existentes.

Las calles, plazas o parques que en otros tiempos servían como foros públicos para el debate han sido reemplazados en la actualidad por los medios de comunicación de masas: en un principio, por la prensa escrita, luego por la radio y la televisión y, más recientemente, por el Internet. En este sentido, la frecuencia, por ejemplo, de los debates públicos televisivos —sin prejuicio de que también puedan hacerse mediante Internet— sirve de baremo también de la calidad democrática de la vida política de una sociedad. Los debates televisivos entre los principales candidatos en cualquier campaña electoral es un espectáculo cívico de primer orden que debería constituir una exigencia electoral regulada. Sería la manera de que las campañas resultasen dialogadas y confrontadas y de evitar además las caras campañas meramente propagandísticas, que a la postre deben pagar los contribuyentes. En definitiva, debería tomarse en serio que el contraste público de pareceres no es sino el elixir vital de cualquier democracia.

Mientras que la genuina deliberación de los asuntos públicos brilla por su ausencia incluso en los parlamentos, en esta sociedad *telecrática* (esto es, en la que, como afirma Sartori, impera el «vídeo-poder») se da por sentado que una mentira o un eslogan repetido hasta la saciedad acaba convirtiéndose en un argumento irrefutable, cuando no en una verdad incontestable. El deterioro del debate público responde, como sostiene el filósofo argentino C. S. Nino (1997: 224), «a la forma en que operan los medios masivos de comunicación, particularmente la televisión, que controla el proceso político». No sólo en los períodos electorales, en donde se utiliza una publicidad intensa de tipo comercial, sino también en el curso de la actividad política ordinaria: incluso los oradores parlamentarios no inducen a los demás parlamentarios a cambiar de opinión y —lo que aún es más grave— ni siquiera lo pretenden. Todo está decidido de antemano y tan sólo se trata de deslumbrar a periodistas y telespectadores. La política y, en particular, la actividad parlamentaria, se reduce así a mero espectáculo mediático. El monólogo se impone al diálogo (y cuando parece que existe, resulta ser de sordos). La propaganda prevalece sobre el debate. Hecho que además se agrava cuando la propaganda resulta mendaz. No se requiere una enorme perspicacia para entender que lo que más ahuyenta a los ciudadanos de la política y fomenta su desafección es el uso deliberado de la mentira en el ejercicio del poder y en la gestión de lo público. En este sentido, recientemente los

ciudadanos de las democracias occidentales han sido testigos de cómo se ha emprendido una guerra contra Irak apoyándose en unos argumentos que todo el mundo sabía que eran mentira, empezando por aquellos mismos que los esgrimían (cfr. Velasco, 2003). Las mentiras representan auténticas armas de destrucción masiva para la democracia.

Los avances tecnológicos —en especial, el Internet— revocan algunos de los tópicos de la teoría política tradicional y, en particular, uno especialmente enraizado: en las sociedades de masas, en razón de la población y del tamaño del territorio, la democracia ya no puede ser sino democracia representativa. La posibilidad de que los ciudadanos participen activamente no sólo en la elección de sus representantes, sino también en la elaboración de las leyes que les afectan y, sobre todo, en su aprobación, es un hecho que tan sólo la inercia de la clase política impide poner en marcha (cfr. Echeverría, 2003). Existen mecanismos técnicos que posibilitan no sólo la consulta de los ciudadanos, sino también que ésta se realice en condiciones de seguridad, anonimato y confidencialidad. Si se pusieran en marcha, el perfil de las democracias reales cambiaría radicalmente y se tornarían en democracias descentralizadas, antijerárquicas y de participación directa. Es cierto que, hoy por hoy, la interpenetración entre Internet y esfera política es un proceso aún bastante indefinido e incierto, existiendo además el riesgo, como ha sucedido con otros medios de comunicación, de que acabe siendo preso de las concentraciones de poder político y económico (cfr. Winner, 2003). No por ello habría que dejar de explorar las posibilidades que nos abre la tecnología informática.

VI. LA CALIDAD DEL DEBATE PÚBLICO: ALGUNAS PROPUESTAS PRÁCTICAS

Autores como Habermas no conciben la actividad filosófica sin la presencia en su horizonte de la idea de una sociedad libre de cualquier forma de dominación. Éste es precisamente el sentido del proyecto filosófico de una teoría crítica de la sociedad, que describe y contempla la realidad desde el contraste con lo que sería posible o deseable. Formular una teoría política de tipo normativo —como es el caso de la democracia deliberativa— implica no limitarse a describir lo realmente existente como si fuera lo único que pudiera existir. No cabe duda de que las exigencias que encierra la noción de democracia deliberativa apenas se han visto satisfechas en momento alguno de la historia humana. Son exigencias que se hacen valer como crítica moral a los excesos orgánicos de las democracias contemporáneas, pero resulta harto complicado que algún día puedan implementarse en la totalidad y radicalidad de sus implicaciones. La noción designa un horizonte de expectativas, sin duda deseables, más que la descripción de una situación dada o que se dará en un futuro próximo. Ese componente utópico no debería, sin embargo, ser razón para despacharla sin más. Como diría uno de los padres fundadores de la sociología contemporánea, no conocido ciertamente

por sus inclinaciones idealistas, «es completamente cierto, y así lo prueba la historia que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez» (Weber, 1988: 178).

Si la utopía implica una exploración de lo posible frente a la mera aceptación de lo ya dado, entonces la democracia deliberativa constituye una vía política que sería recomendable al menos indagar y tantear. Con este propósito, y más allá de los planteamientos abstractos, por bien intencionados que sean, habrían de estudiarse algunas medidas concretas dirigidas a dar vitalidad a la actividad política y aumentar el componente participativo y deliberativo de los regímenes democráticos existentes. Para concluir este artículo, y con la expresa voluntad de provocar la discusión, se propone someter a público escrutinio medidas del siguiente tenor:

1. Sobre la deliberación en los parlamentos:

- a) Posibilitar la participación de las diversas organizaciones y colectivos afectados por los diversos proyectos legislativos en los momentos decisivos del proceso de su elaboración.
- b) Transparencia de los procedimientos parlamentarios, facilitando la publicidad necesaria para que los ciudadanos puedan acceder al conocimiento de las leyes desde su promulgación.
- c) Promover instrumentos de control de la labor gubernamental, rebajando el número de votos exigidos para la constitución de comisiones de investigación.
- d) Rendir cuentas a la ciudadanía como práctica habitual y normalizada, de manera que el parlamento sea percibido como lugar de expresión más de la voluntad ciudadana que de los intereses partidistas.
- e) Gestión plural de los medios públicos de comunicación, de manera que no dependan de los gobiernos de turno, sino de las asambleas parlamentarias. Regular la propiedad de medios privados de comunicación para evitar oligopolios. Normalizar los debates televisivos entre los diversos grupos parlamentarios tanto en los procesos electorales como en medio de las legislaturas.

2. Sobre la actividad de los partidos:

- a) Control del grado de cumplimiento de las promesas electorales, que podría encomendarse a una comisión no parlamentaria y ajena a los partidos políticos que emitieran un dictamen antes de la convocatoria de las siguientes elecciones.
- b) Control estricto de la actividad y la participación de los diputados en las labores parlamentarias. Difusión pública de estos datos al final de cada legislatura.
- c) Difusión de las fuentes de financiación de los partidos y auditorías obligatorias. Limitación de la financiación privada.

- d) Fomentar la cultura de la dimisión entre los diferentes actores y gestores políticos, como forma de garantizar la responsabilidad y la rendición de cuenta ante los electores.
3. Sobre la participación ciudadana:
- a) Articular medios que posibiliten la participación ciudadana en la elaboración de presupuestos municipales, autonómicos y estatales.
 - b) Establecer mecanismos de participación ciudadana en la actividad legislativa parlamentaria. Búsqueda de fórmulas para que por vía informática los ciudadanos puedan presentar directamente enmiendas y alegaciones que deberían ser respondidas de manera razonada por los diversos grupos parlamentarios. Examinar fórmulas de consulta popular rápida por medios informáticos antes de la ratificación parlamentaria definitiva.
 - c) Democratizar el funcionamiento interno de los partidos políticos, de manera que puedan ser espacios de expresión de la pluralidad social. Democratizar, en especial, el proceso de selección de los candidatos electorales. Estudiar la posibilidad de confeccionar listas abiertas.
 - d) Impulsar la formación política de los nuevos ciudadanos: tanto de las nuevas generaciones de electores como de la población inmigrante.
 - e) Impulsar programas que estrechen la «brecha digital» (así como la «brecha socioeconómica» que está en la base de la misma) entre los que tienen acceso a los medios de comunicación y, en especial, al Internet y los que no, carencia que dificulta el acceso diversificado a la información.

BIBLIOGRAFÍA

- ARENDT, Hannah, «Sobre la violencia», en *Crisis de la República*, Taurus, Madrid, 1973, pp. 109-186.
- BENHABIB, Seyla (ed.), *Democracy and Difference*, Princeton, Princeton U. P., 1996.
- BOBBIO, Norberto, *El futuro de la democracia*, FCE, México, 2000.
- BOHMAN, J., *Public Deliberation*, MIT Press, Cambridge (Ma), 1997.
- BOHMAN, J., y REHG, W. (eds.), *Deliberative Democracy*, MIT Press, Cambridge (Ma), 1997.
- CALHOUN, Craig (ed.), *Habermas and the Public Sphere*, MIT Press, Cambridge (Ma), 1992.
- COHEN, Jean L., y ARATO, Andrew, *Sociedad civil y teoría política*, FCE, México, 2000.
- DWONS, Anthony, *Teoría económica de la democracia*, Aguilar, Madrid, 1973.
- ECHEVERRÍA, Javier, «Tecnociencias de la información y participación ciudadana», en *Isegoría*, núm. 28, 2003, pp. 73-92.
- ELSTER, Jon (comp.), *La democracia deliberativa*, Gedisa, Barcelona, 2001.

- FERRARA, Alessandro, «El desafío republicano», en *Claves de razón práctica*, núm. 139, 2004, pp. 4-12.
- FISHKIN, J. S., *Democracy and Deliberation*, Yale U. P., New Haven, 1991.
- GUTTMANN, A., y THOMPSON, D., *Democracy and Disagreement*, Harvard U. P., Cambridge (Ma), 1996.
- HÄBERLE, Peter, *Pluralismo y Constitución*, Tecnos, Madrid, 2002.
- HABERMAS, Jürgen, *Historia y crítica de la opinión pública*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- *Ensayos políticos*, Península, Barcelona, 1988.
- *La necesidad de renovación de la izquierda*, Tecnos, Madrid, 1991.
- *Facticidad y validez*, Trotta, Madrid, 1998.
- HELD, David, *Modelos de democracia*, Alianza, Madrid, 1991.
- MACEDO, S. (ed.), *Deliberative Politics*, Oxford U. P., Nueva York, 1999.
- MAUS, Ingeborg, «Sinn und Bedeutung von Volkssouveränität in der modernen Gesellschaft», en *Kritische Justiz*, núm. 2, 1991, pp. 137-150.
- MOUFFE, Chantal, *El retorno de lo político*, Paidós, Barcelona, 1999.
- *La paradoja democrática*, Gedisa, Barcelona, 2003.
- NINO, Carlos S., *La constitución de la democracia deliberativa*, Gedisa, Barcelona, 1997.
- RÖDEL, U.; FRANKENBERG, G., y DUBIEL, H., *La cuestión democrática*, prólogo de Agapito Maestre, Huerga y Fierro, Madrid, 1997.
- SAMPEDRO BLANCO, Víctor, *Opinión pública y democracia deliberativa: medios, sondeos y urnas*, Istmo, Madrid, 2000.
- SARTORI, Giovanni, *Teoría de la democracia*, Alianza, Madrid, 1988.
- *Homo videns*, Taurus, Madrid, 1998.
- SCHUMPETER, Joseph, *Capitalismo, socialismo y democracia*, Folio, Barcelona, 1996.
- SUNSTEIN, Cass R., *República.com. Internet, democracia y libertad*, Paidós, Barcelona, 2003.
- TAYLOR, Charles, «Invocar la sociedad civil», en *Argumentos filosóficos*, Paidós, Barcelona, 1997, pp. 269-292.
- TOCQUEVILLE, Alexis de, *La democracia en América*, 2 vols., Aguilar, Madrid 1989.
- VELASCO, Juan Carlos, «De la difícil justificación de una “guerra preventiva”», en *Claves de razón práctica*, núm. 134, 2003, pp. 73-75.
- WEBER, Max, *El político y el científico*, Alianza, Madrid, 1988.
- WINNER, Landgon, «Internet y los sueños de una renovación democrática», en *Isegoría*, núm. 28, 2003, pp. 55-71.